Ayotzinapa, la rabia y la esperanza

Roberto González Villarreal

EDITORIAL TERRACOTA ET

Contenido

Introducción 13
Protestas y movimientos 16
Composición 17
Agradecimientos 17

Parte I. Génesis y trasformaciones de la protesta

La agresión 23
Los ataques 24
Primero 24
Segundo 24
Tercero 25
Cuarto 26
…Y un desollado 26
Parte de la agresión 27
Las razones de la fuerza 28
Control de daños 28
La defensa del alcalde 29
El control de la seguridad municipal 29
Las líneas de investigación 30
Las primeras protestas 31
Informar 31
Manifestar 33
Solidaridades inmediatas 33
Redes sociales 33
El ensamble inicial 35
Los rezongos negros 36
La dinámica estatal de la contienda 37

Simulacros, los juegos del poder 37
La fuga del alcalde 38
La disputa por las responsabilidades 39
El crimen organizado 40
La defensa del gobernador 41
Desapariciones 42
Nombrar 43
Indagar 44
Simular 40
Aplazar 46
El horror 47
Las redes de la protesta 48
La población de la protesta 49
La geografía de la movilización 52
Las tácticas de lucha 52
Frecuencia de las acciones 54
Primer cambio de fase: La dinámica nacional 58
Cambios jurisdiccionales 60
La coadyuvancia 61
Las investigaciones de la PGR 61
Los afanes del gobernador 63
Ampliación y densificación
de las redes de protesta 64
Coordinación, organizaciones 70
Modificaciones en la problematización política 74
Segundo cambio de fase: La dinámica intensiva 84
Murillo Karam, el desaparecedor 85
Resultados previos 86
Nuevos testimonios 86
Reconstrucción de hechos 87
Respuestas 89
La última jugada de la desaparición 90
Redes de protesta: intensidades y diferencias 92
La dinámica molecular
(la acción termítica, los ataques en enjambre) 94
Las acciones de la Asamblea Nacional Popular 98
Las rutas de las Interuniversitarias 103
Las intensidades digitales 109
Paralelismos, diferencias, hegemonías 112

Los límites de la gestión:
Ilegitimidad y represión 114
La trampa de la ilegitimidad 115
El descrédito de la PGR 116
El desdoro del Ejecutivo Federal 117
La salida represiva 120
Impedir las manifestaciones: las técnicas del bloqueo y el encapsulamiento 122
Generar miedo: infiltrados y detenciones aleatorias 123
Controlar el territorio y limitar los desplazamientos 124
Amenazas 125
Provocaciones, intimidaciones 126
Microfascismos: barbaridades, ridiculeces 128
Legislar la criminalización de la protesta 129
La tecnocensura o el terrorismo digital 129

Parte II. Claves

Tecnología de la desaparición 135
Definición 136
Anatomía 136
Objetivos 137
Fue el estado 139
#YaMeCanse 146
¡Que se vayan todos!
El fin del régimen de la alternancia 150
La materialidad sensible de lo político 153
Multitud y forma multitud de la protesta 157
La onda larga de las resistencias 164
Bordeando los límites de la protesta 169
Siglas y acrónimos 174

La agresión

El 26 de septiembre, la asamblea estudiantil de la Normal Rural Isidro Burgos decidió asistir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la ciudad de México. Como en otras ocasiones en que el número de estudiantes sobrepasaba la capacidad del transporte escolar —un camión y dos Urvan—, propusieron retener tres autobuses. Además, los necesitarían para las prácticas docentes en comunidades de las siete regiones del estado. Esta vez lo harían en Iguala, pues un día antes, otros compañeros habían sido intimidados por la policía en la central de Chilpancingo.

Era una práctica regular. Un modo de resolver problemas coyunturales. Las empresas lo sabían, el gobierno del estado también. Más aún: había un acuerdo informal, tácito. La toma de los camiones seria pacífica y los devolverían sin daño. Claro está, ellos pagarían la gasolina y los viáticos de los choferes. No es una práctica de los normalistas de Ayotzinapa nada más. Ocurre en otras normales rurales. En algunas, se sabe que las líneas de autobuses pasan la factura a los gobiernos estatales y éstos la descuentan del presupuesto para raciones. No siempre, afortunadamente.

La comisión estaba integrada por unos ochenta estudiantes de primer semestre, *Los Pelones*, así como por miembros del comité estudiantil. Salieron cerca de las seis de la tarde, en otros dos autobuses de la línea Estrella de Oro. Se detuvieron en el camino para botear y dar a los choferes una compensación económica. Después de las siete de la noche, llegaron al cruce de la carretera federal Chilpancingo-Iguala y Huitzuco. Pasaron los retenes sin que nadie los molestara. Se dirigieron a la central de autobuses de Estrella Blanca, en Arteaga, entre Galeana y Altamirano. Frente al mercado municipal.[1]

[1] Esta reconstrucción se basa primordialmente en los testimonios de sobrevivientes de la agresión, disponibles en las redes sociales, así como en diversos reportajes aparecidos en *El Sur*. En

Los ataques

Fueron cuatro. Coordinados. Sucesivos. Planeados. Ejecutados con saña. Con objetivos definidos: escarmentar a los adversarios, mostrar la capacidad de fuerza, regodearse en el odio, infundir miedo y, sobre todo, exhibir el poder.

Primero

Pasadas las ocho de la noche, los estudiantes llegaron a la central. Avisaron a los encargados de la empresa y retuvieron dos autobuses de Costa Line y uno de Estrella Roja. Los dos primeros salieron por Ignacio Manuel Altamirano hasta llegar a Periférico Sur. Los otros dos, los que acababan de tomar, se dirigieron hacia Periférico Norte. Tomaron Hermenegildo Galeana, que cambia de nombre a Juan Álvarez. Al pasar por el zócalo, donde horas antes la esposa del presidente municipal había dado su informe como responsable del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), los siguieron cinco patrullas. Los venían siguiendo, monitoreando incluso, quizá desde que llegaron. O desde que partieron de Iguala. Siempre lo hacían. Se detuvieron a hablar con los policías. Recibieron balazos. Primero les tiraron a los pies, luego a los autobuses. Y a ellos. Regresaron al primer camión y se fueron. Rápido, trataron de escapar.

Segundo

En la esquina de las calles Juan Álvarez y Periférico Norte, alrededor de las nueve de la noche, una mujer policía atravesó una patrulla. Algunos estudiantes bajaron, pidieron que desbloquearan el camino. No hubo respuesta. Trataron de quitarla, incluso un estudiante intento arrancar el motor. No pudo. La empujaron. Tampoco lograron moverla. Entonces se escucharon detonaciones. Aldo Gutiérrez Sotelo, de primer semestre, 19 años, originario de Zihuatanejo, cayó de un disparo en la cabeza. Daniel Solís Gallardo, de Zihuatanejo, 18 años, de primer semestre de la Licenciatura en Educación Primaria, murió en el acto. Edgar Andrés Vargas recibió un balazo en la cara. Inició la desbandada. Algunos se metieron debajo del autobús. Eran los que quedaron entre los dos camiones recién tomados. Marcaron al 066 para pedir una ambulancia. La operadora no quiso atenderlos.

---

particular, Jacob Morales Antonio, "Al menos 40 de los estudiantes que están desaparecidos fueron detenidos por policías de Iguala, afirman testigos", *El Sur*, 29 de septiembre de 2014; Anarsis Pacheco Pólito, "Si nos hubiéramos mantenido en la carretera a la mejor nos hubieran ido a rematar", *El Sur*, 4 de octubre de 2014.

Los paramédicos llegaron media hora más tarde. Los que se presentaron diez minutos después fueron otros policías, a bordo de tres patrullas de doble cabina. De esas tipo Ram. Un comandante se bajó y dijo querer dialogar. Los estudiantes pidieron que bajaran las armas. La respuesta fue una amenaza: "como quiera, ahorita los voy venir a levantar". Y sí, era lo que estaban haciendo los policías de las patrullas 018, 020, 023, 027, 028 y 302 con los estudiantes del autobús de la retaguardia.

Al recibir las llamadas de sus compañeros, los que se encontraban en los primeros autobuses regresaron a Iguala. Cuando llegaron a Periférico Norte, tres patrullas les cerraron el paso. Como los otros, se bajaron a dialogar. Los policías los recibieron con las armas dispuestas. Apuntaban a su pecho. En ese momento empezaron a correr. Eran como quince estudiantes. Unos corrieron al cerro. Otros a la avenida Dr. Arturo Beltrán Ortega. Cruzaron el puente, el que está por el Tecnológico. Ahí vieron a un chofer de Estrella de Oro herido, junto a una patrulla. Se escondieron. Temblando por la lluvia y por el miedo. Ahí se quedaron hasta la mañana siguiente.

Eran cerca de las diez de la noche cuando los pasajeros que llegaban a la ciudad reportaban que en el crucero de la autopista un retén de la policía federal y el ejército controlaban los accesos y las salidas de Iguala. Justo cuando los estudiantes eran balaceados, perseguidos y detenidos.

Tercero

Los policías continuaron buscando a los normalistas. En la ciudad y en la carretera a Chilpancingo. En el trayecto, atacaron autobuses, taxis y camiones. Cerca de la medianoche, el taxi en el que viajaban varios dirigentes de la Unión Nacional de Sindicatos del Colegio de Bachilleres de la República Mexicana pasó el retén de policías y militares. Poco después, al llegar al crucero de Santa Teresa, divisaron una camioneta con seis personas armadas. Vestían de policías, estaban en posición de ataque. Cuando pasaron junto a ellos les comenzaron a disparar. El taxista apagó las luces y aceleró. Les poncharon tres llantas y perforaron el radiador. No pudieron avanzar mucho. Unos 300 metros después se detuvieron. Minutos más tarde pasó un camión torton al que también le habían disparado los policías. Iban tres heridos.

Por ahí pasaba también el autobús en el que viajaban los integrantes del equipo de futbol Los Avispones, de Chilpancingo, de la tercera división del futbol mexicano. Acababan de ganarle al equipo de Iguala, tres goles a uno, cuando poco después de las doce de la noche una camioneta les cerró el paso. El chofer tuvo que maniobrar, mientras se escuchaban

las ráfagas de metralletas. Víctor Manuel Lugo Ortiz, *El Barcel*, cayó herido de muerte. El camión se volcó. Las balas alcanzaron a otros seis vehículos. Varias de esas mataron a la señora Blanca Montiel Sánchez, e hirieron al conductor y a otros tres pasajeros de un colectivo.

Los primeros disparos acabaron con la vida del chofer. Cuando el camión se detuvo, los policías intentaron abrir la puerta. No pudieron, estaba estancada. El entrenador del equipo les gritaba que no dispararan, que eran jóvenes futbolistas. Pero no hacían caso. "Los vamos a matar a todos", le contestaron. Y dispararon, hiriéndolo en el rostro y en el pecho. Las balas alcanzaron también a David Josué García Evangelista, *El Pollo*, un mediocampista de quince años, y a varios futbolistas más. Veinte minutos duró la balacera. Dos horas después llegó la ayuda. Los policías federales no quisieron llevarse a los heridos. Luego lo hizo la Cruz Roja. El 066 no funcionó. Otra vez.

Cuarto

Alrededor de las 12:30 de la noche, del 27 de septiembre, un grupo de normalistas que habían llegado a socorrer a sus compañeros, del comité estudiantil y maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), estaban dando una conferencia de prensa en el lugar de los primeros ataques, escucharon un estruendo mayúsculo del lado oeste del Periférico. Al voltear, observaron un grupo de hombres con los rostros cubiertos. De negro, como los federales. Se colocaron del lado de los autobuses y siguieron disparando. A todos, estudiantes, maestros, normalistas. Las balas alcanzaron a Julio César Ramírez Nava, de Tixtla, 23 años, primer semestre de Licenciatura en Educación Básica. Muerto casi al instante. La maestra Fátima Bahena recibió balas en el tórax y el pie derecho. Todos corrieron. Un alumno relata que le pidió a un camarógrafo de Televisa que filmara lo que ocurría. Se negó, "me van a matar si lo hago", fue su respuesta. Muchos corrieron en sentido contrario a la calle de Juan Álvarez. Buscaron refugio en casas y terrenos baldíos. Esperaron cubiertos por la noche y por la lluvia. En el lugar de los hechos, una Urvan de la escuela, en la que habían llegado los dirigentes después de los primeros ataques, tenía los vidrios rotos e innumerables impactos de bala.

…y un desollado

A la mañana siguiente se dio a conocer la horrible muerte de Julio César Mondragón Fontes, de San Miguel Tecomatlán, Estado de México, 22

Primer cambio de fase: La dinámica nacional

El 2 octubre se consolidaron las protestas en Guerrero, con la dispersión territorial, la multiplicación de poblaciones críticas, la diversidad de formas de lucha y la frecuencia creciente de las acciones de resistencia. La red estatal se amplió, enlazando nuevos nodos sociales y territoriales, también se volvió más densa, tanto por las interconexiones nodales, como por la compactación de los ensamblajes que configuran cada nodo. El ejemplo del Movimiento Popular de Guerrero (MPG) es ilustrativo. No sólo realizaron protestas con los maestros de la CETEG en más municipios, sino que también otros sectores del MPG realizaron protestas particulares, como #YoSoy132Acapulco, y se incorporaron a las acciones generales. Densa y extensa se volvió la red de la protesta, también por la masificación de los apoyos internéticos, con la viralización de *hashtags* como #TodosSomosAyotzinapa, #Ayotzinapa y #JusticiaAyotzinapa.

Esta fase de la movilización se caracteriza, entonces, por la ampliación de la protesta en el territorio, la cotidianidad de las acciones, la incorporación de más sectores, la extensión de muestras de solidaridad a los normalistas de Ayotzinapa, a sus familiares y compañeros. Una red territorial, a la que se le sobrepone o la orbita, una red espacial distinta, la del Internet —la blogosfera—, que recoge los temas, transmite emociones, informa, aclara, critica, apoya, combate, también a favor de Ayotzinapa. En este momento, las redes territoriales y digitales conforman un plano localizado en Guerrero, y sobre la masacre de Iguala. Es la fase estatal de la movilización, no sólo por el territorio de las acciones sino por la ubicación de los eventos, los sujetos de solidaridad y la problematización política: una cuestión de Iguala, del presidente municipal y el gobernador, de sus ligas con el crimen organizado y de la cobertura perredista a su acción política.

En suma: sucedió en Iguala, a normalista rurales, a sus familiares, por gobiernos municipales y estatales; por lo tanto, un problema no sólo del

municipio, sino de Guerrero, ahí se tenía que solucionar —como decía Enrique Peña Nieto, respecto a la jurisdicción—; es a los normalistas y a sus familiares a los que hay que apoyar, acudiendo, como los miembros de la FECSM; realizando protestas, como los profesores de Oaxaca y los estudiantes de Zacatecas, o apoyando en las redes sociales. Un movimiento *de* y *en* Guerrero.

Desde luego, este diagrama de la movilización era inestable. Si bien había logrado más o menos definir el espacio, el ritmo, los participantes, los objetivos y las formas de lucha en menos de una semana, lo cierto es que algunas de sus acciones generaban alteraciones micropolíticas, que en un momento dado propiciaron un cambio de fase en el movimiento.

La fase estatal no implica quietud o estancamiento, por el contrario, los flujos de energía de los que protestan colisionan con el silencio, la ineptitud, la ineficacia o la negativa de las autoridades, aumentando la fuerza de las movilizaciones, acumulando enlaces externos, así como pequeños cambios que generan protestas mayores ya no en el estado, ni con las autoridades estatales, sino con el gobierno federal, y luego sobre problemáticas nacionales, ya no sólo sobre los crímenes de Ayotzinapa, sino sobre la actuación del gobierno federal y el funcionamiento del régimen político. Son las transiciones de fase, no de escala ni magnitud, sino de estado de la movilización.

En los primeros días de octubre, por ejemplo, se acumulan las marchas, mítines, tomas y bloqueos en todo Guerrero, mientras las autoridades estatales anunciaban fosas y cuerpos mutilados y quemados, sin explicar, sin decir nada; una política de conjeturas, sin información, entonces las protestas arrecian, los involucrados aumentan, el trato con las autoridades federales se complejiza, y las acciones de resistencia se producen en decenas de ciudades del mundo. Ya no se trata entonces del problema de Iguala, o de Ayotzinapa, sino del país, de México. No es un problema local, regional o estatal, sino nacional.

Cuatro son los factores que propician esta transición de fase: cambio de la jurisdicción de los delitos; formación de organismos de coordinación; extensión y densificación de las redes de protesta, con preponderancia nacional, y modificaciones en la problematización política, es decir, conversión del problema de Ayotzinapa en una expresión, una solamente, de un régimen político-criminal, lo que implica una reformulación de contenidos expresivos, materiales y políticos de la movilización; en términos de consignas, lo que va de *"Vivos se los llevaron, vivos los queremos"* a *"Fue el Estado"*.

Cambios jurisdiccionales

En Iguala no se hizo nada. Cuatro días después de la masacre, el presidente municipal insistió en no saber nada:

> Yo hasta ahora no tengo nada, porque no he tenido acercamiento con el procurador ni con ningún funcionario; no tengo ninguna ficha informativa, más que lo que apareció en los medios [...] que son 22 policías (municipales) que están sujetos a investigación en el puerto de Acapulco [...] No tengo ninguna información al respecto todavía, yo no puedo decir nada. Propongo que se hagan las investigaciones necesarias; me voy a sumar y a coadyuvar en las indagatorias para que se esclarezcan lo más pronto posible, y el que sea culpable que se le castigue con todo lo que marca la ley.[1]

Las primeras indagaciones, detenciones y consignaciones las realizó la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero. Los días siguientes los gobiernos estatal y federal se enfrascaron en una abierta lucha-discusión jurisdiccional. Desde el presidente de la República, hasta el secretario de Gobernación y el procurador general insistían en la responsabilidad estatal; a la que se les respondió con la contribución de los tres niveles de gobierno en la seguridad pública. La cuestión, en realidad, era de jurisdicción; el 3 de octubre, el mismo procurador de la República señaló que no atraerían el caso hasta que se acreditara la desaparición forzada o la participación del crimen organizado. El día 4, con el descubrimiento de las fosas en Pueblo Viejo y Loma de Coyote, las cosas cambiaron. La PGR asumió la investigación de los 43 estudiantes. Desde entonces, la procuraduría estatal coadyuvaría en la investigación. Un día después, la CNDH haría lo mismo, dada la "gravedad de las violaciones a los derechos humanos". La masacre de Iguala se volvió un problema federal.

La federalización tuvo una expresión tardía el 6 octubre, cuando Peña Nieto dirigió un mensaje en el que declaró que los crímenes y desapariciones de Iguala eran indignantes e inaceptables. Ese día se anunció que el procurador, Jesús Murillo Karam, se instalaría en Guerrero para encabezar las investigaciones, junto al director de la Agencia de Seguridad. También llegaron a Iguala la Gendarmería Nacional y el ejército, para asumir la seguridad municipal. Un día después, la Cámara de Diputados creó una Comisión Especial en torno al caso Ayotzinapa.

[1] Sergio Acosta Ocampo, "'No tengo informes de muertos': edil de Iguala", *La Jornada*, 30 de septiembre de 2014.

La coadyuvancia

El 7 de octubre, el gobernador Aguirre declaró que la investigación estaba "prácticamente concluida". En los hechos, hacía redundantes las acciones de la PGR. Más aún, su trabajo, pues entregaría al secretario de Gobernación una relación de las autoridades municipales infiltradas por el crimen organizado. Entre ellas, tres del PRD y tres del Partido Revolucionario Institucional (PRI): Teloloapan, Chilpancingo y Arcelia, Acapetlahuaya, San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso.[2] Desde luego, abierto a la cooperación con instancias nacionales e internacionales. El 8 de octubre, en una reunión con delegados de la ONU, solicitó que intervinieran en la investigación.

Las funciones reales de la Procuraduría estatal eran enterrar el problema. Lo hacían mientras en las calles se demandaba su renuncia. Y no sólo a través de organizaciones con años de lucha, como el CETEG o el MPG, sino de ciudadanos y comités alejados de las protestas, como el Consejo Ciudadano de Seguridad, que convocó a una marcha para la paz y la renuncia del gobernador. Seguramente por eso, al casi dar por terminada la investigación, consignado a los culpables, descubierto las fosas, encontrado cuerpos desmembrados y calcinados, *sin ninguna prueba de que fueran los normalistas*, el 10 de octubre presentó su Plan Integral de Reparación del daño a las víctimas del 26-27 de septiembre en Iguala. Un plan de nueve puntos, que incluye la Tarjeta de Atención Integral, para acceder a los servicios médicos y psicológicos, así como a los demás programas sociales existentes en el estado. También, por única vez, apoyos económicos extraordinarios, a modo de indemnización. Más tarde, los padres de familia denunciarían que los querían comprar por cien mil pesos.

Las investigaciones de la Procuraduría General de la República

Junto y al lado, con agendas propias, distintas a las estatales, los funcionarios de la procuración federal de justicia diseñaron un programa de varios puntos. Además de asegurar el municipio, con gendarmes y militares, solicitaron al Congreso permiso para catear el Palacio Municipal de Iguala. Lo que fue aceptado en sesión secreta el 9 de octubre. Un día de conflictos nada subrepticios entre el gobierno estatal y el federal, de acusaciones mutuas sobre si conocían o no los lazos entre el alcalde de Iguala y el crimen organizado, lo cierto es que ese día, la información sobre

[2] Mariana Labastida, "Menciona Aguirre seis municipios infiltrados por la delincuencia; tres son del PRD y tres del PRI", *El Sur*, 10 de octubre de 2014.

Segundo cambio de fase: La dinámica intensiva

En la primera semana de noviembre ocurrió un nuevo cambio de fase en la protesta. El 5 de noviembre se realizaron la Tercera Jornada Nacional e Internacional por Ayotzinapa y la Segunda Asamblea Nacional Popular para redefinir sus objetivos y el programa de lucha, vinculando el crimen de Estado con la violencia generalizada, las reformas estructurales y la impunidad, para llamar a la construcción de un nuevo régimen político; la Interuniversitaria logró convocar a un paro de 72 horas a decenas de universidades e instituciones de educación superior en todo el país. Incluso algunas privadas, como la Universidad Iberoamericana, fueron a paro activo, en una jornada de acción y reflexión por Ayotzinapa, encabezada por sus autoridades; en El Colegio de México, los estudiantes hicieron el primer paro desde 1968. En ciudades de todo el mundo, activistas y ciudadanos se unieron a la exigencia de aparición con vida de los 43 normalistas.

En Guerrero seguían tomadas 28 alcaldías; el repertorio de acciones comenzó a variar en todo el país, problematizando la utilidad de las marchas y concentraciones, llamando a distintas formas de la acción directa no violenta, como la liberación de plumas y la toma de casetas en carreteras. En las redes digitales, los *tags* de apoyo seguían en los primeros lugares, y una creciente solidaridad ciudadana, individual y familiar, empezó a hacerse presente en micromovilizaciones.

La respuesta gubernamental a esta creciente protesta social, se desplegó en varias direcciones. El 7 de noviembre, el titular de la PGR dio una conferencia de prensa para mostrar los avances de la investigación; luego, comenzaron distintas formas de amedrentamiento y represión; más tarde, una andanada de iniciativas legales para regular las manifestaciones y la expresión política en redes sociales; al mismo tiempo, una estrategia de división en las protestas, de infiltración y fabricación de delitos.

La dinámica de la protesta cambió, no sólo hacia otros sectores, como obreros y trabajadores, o a otras latitudes, sino a la trasformación de la solidaridad a los normalistas, a una protesta en primera persona del singular, magníficamente representada por el *hashtag* #YaMeCanse. En términos de etiquetas, va de #JusticiaPorAyotzinapa, a #TodosSomosAyotzinapa y #YaMeCanse.

Esta nueva transición de fase, hacia una dinámica centrada en las acciones de individuos y colectivos que encuentran múltiples razones para protestar, que partieron de la lucha por Ayotzinapa y reconocieron que era la síntesis de muchas más, y que tras las capuchas de los hombres de negro se encontraba un Estado criminal, podría denominarse una dinámica intensiva, sin que eso quiera decir que renuncie a la extensión geográfica, digital y relacional de la protesta. Pero sí que la fuerza de su dinámica se encuentra en la heterogeneidad de los que protestan, desde las organizaciones formadas en octubre, como la ANP y las Interuniversitarias, además de las preexistentes (FECSM, CETEG, MPG), hasta los individuos y colectivos locales; de su repertorio de acciones, de sus iniciativas, de su cotidianidad, de su ubicuidad y, también, del modo como elaboran posiciones, críticas, argumentos, continuidad y diferencia en la movilización.

El nuevo ensamblaje de las protestas se formó por acumulaciones de intensidad, por ejemplo, en las redes digitales, con la mayor combinación entre acciones digitales, territoriales y corporales; por las respuestas a las iniciativas gubernamentales, como la conferencia de prensa de Murillo Karam; las acciones de las organizaciones de la protesta, ANP e Interuniversitarias, y las protestas moleculares en todo el territorio nacional, en muchas partes del mundo, de grupos, colectivos locales, formados para la ocasión, preexistentes, que realizaron innumerables formas de solidaridad, de protesta y de apoyo, desde *flash mobs*, hasta performances, videos, instalaciones, mítines, cartas, etc. El modo como se articulan, diferencian, compiten, realizan las protestas unos y otros, van configurando una red virtual de la movilización. Lo virtual no se confunde con lo digital, sino con la potencialidad inmanente de la protesta, que resulta de la interconexión entre redes digitales y territoriales, y la excedencia de la protesta respecto a las formas organizativas del movimiento.

Murillo Karam, el desaparecedor

El 7 de noviembre, a 43 días de la desaparición, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam dio una conferencia de prensa sobre los avances de la investigación. Dos días después de la Tercera Jornada

Global por Ayotzinapa, antes de la gira de Peña Nieto a China y Australia. Poco antes se había reunido con los padres de familia para informarles de los avances en la investigación. Avances, decía una y otra vez. No estaba concluida, pero consideraba necesario informarles a ellos y a la sociedad, los últimos pormenores derivados de aprehensiones recientes.

Resultados previos

Primero habló sobre 33 días de un gran esfuerzo del Estado mexicano, en el que han participado "diez mil elementos, entre policías, soldados, marinos, ministerios públicos, investigadores y peritos que han estado en la zona buscando la pista precisa para dar con la ubicación de estos jóvenes".[1]

Hasta esa fecha, se había detenido a los que participaron en el asesinato de los tres estudiantes el 26 de septiembre, así como del futbolista, el chofer y la señora del taxi, y a los que "retuvieron, secuestraron, trasladaron y entregaron al grupo de personas a la organización criminal Guerreros Unidos. Se detuvo a Sidronio Casarrubias Salgado, que es el líder del grupo criminal que corrompió y se apoderó de las policías municipales de Iguala y Cocula".[2] El 23 de octubre, al día siguiente de la Segunda Jornada Global por Ayotzinapa, se aprehendió al presidente municipal y a su esposa.

Nuevos testimonios

Sin decir el día, Murillo Karam anunció la detención de

> Patricio Reyes Landa, alias *El Pato*, y de Jonathán Osorio Gómez, alias *El Jona*, quienes fueron detenidos en el poblado de Apetlaca, en el municipio de Cuetzala del Progreso en el estado de Guerrero. Estas dos aprehensiones derivaron de la localización y detención de una tercera persona de nombre Agustín García Reyes, alias *El Chereje*. Los tres capturados son miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, y al rendir su declaración confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula.[3]

[1] Jesús Murillo Karam, "Palabras del procurador Jesús Murillo Karam, durante conferencia sobre desaparecidos de Ayotzinapa", 7 de noviembre de 2014, http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/07/intervencion-del-procurador-de-la-republica-jesus-murillo-karam-durante-la-conferencia-de-prensa-para-exponer-el-caso-de-los-estudiantes-de-ayotzinapa-4374.html

[2] *Idem*.

[3] *Idem*.

Reconstrucción de hechos

El grupo de jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa subió a bordo de dos camiones Estrella de Oro rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala. Posteriormente, se trasladaron a la terminal de autobuses donde tomaron otros dos camiones de otra empresa. El ex presidente municipal de Iguala, quien tenía designado en la comunicación interna de la policía municipal el código A5, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones, según declara el propio operador de radio de la central de policía municipal de Iguala, David Hernández Cruz y la ratifica uno de los vigilantes, que ellos conocen como halcones, que recibía comunicación. En este mismo evento, como se ha informado, los policías municipales de Iguala privaron de la vida a tres normalistas.

El ex presidente municipal se encontraba en esos momentos en el informe que daba su esposa sobre sus actividades frente al DIF municipal. Se avanza en la investigación sobre María de los Ángeles Pineda, por su relación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita junto con su esposo. Después del primer incidente que sufren los normalistas y al continuar su camino a los autobuses, elementos de la policía municipal de Iguala los detienen con violencia y los trasladan a la central policiaca. Desde ese punto, y con apoyo de la policía municipal de Cocula, trasladan en patrullas de los municipios al grupo de jóvenes hasta un punto entre Iguala y Cocula donde se abre una brecha hacia la zona que se denomina Loma de Coyote.

Ha quedado acreditado por las investigaciones del Ministerio Público federal que en este punto entre Iguala y Cocula los policías municipales entregaron a los retenidos a miembros del grupo criminal de Guerreros Unidos. En la investigación que nos fue remitida por la fiscalía de Guerrero, se aseguraba que los jóvenes habían sido llevados a las fosas ubicadas en la zona de Pueblo Viejo, en donde se señalaba, se les había sepultado. Hasta el momento los peritajes realizados nos han permitido tener la certeza de que los restos encontrados en esas primeras fosas de Pueblo Viejo no son los de los estudiantes y también se la logrado la plena identificación de cuatro de las personas que se encontraban en esas fosas, las cuales fueron asesinadas en el mes de agosto, es decir, un mes antes de los hechos. Incluso se encontraron restos que correspondían a mujeres, mientras que el grupo de estudiantes de Ayotzinapa estaba constituido sólo por varones…

En esa coyuntura, el hoy detenido Sidronio Casarruvias Salgado, líder de ese grupo criminal, como lo refiere en su declaración, fue contactado por su lugarteniente Gildardo López Astudillo, conocido como *El Gil,* quien le informó vía mensaje celular los conflictos que se estaban suscitando en Iguala, atribuyéndolos al grupo delictivo contrario. Casarruvias Salgado fue quien avaló las acciones para "defender su territorio"…